

Problemas y perspectivas de la economía de los países subdesarrollados

BANCO MUNDIAL

NOTICIA

En agosto último, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) dio a conocer su segundo Informe sobre el desarrollo mundial, 1979, cuyo propósito es ofrecer una evaluación amplia de las cuestiones relativas al desarrollo. En el informe de este año el Banco Mundial "hace hincapié en los problemas del empleo, la industrialización y la urbanización en los países en desarrollo", y examina las políticas "para alcanzar los objetivos gemelos del crecimiento y la aminoración de la pobreza". Enseguida se reproduce el capítulo 9, "Conclusiones", de dicho informe.

TEXTO

Los objetivos fundamentales del desarrollo económico siguen siendo el aumento de los ingresos y la aminoración de la pobreza absoluta. En este Informe se han evaluado los problemas y las perspectivas que surgen en el camino hacia la consecución de estos objetivos, en cuatro ámbitos principales:

- El alcance y la naturaleza de las dificultades a las que se enfrentan los países en desarrollo en materia de empleo, y los programas y políticas que ofrecen las mejores perspectivas de creación de empleos y aumento de los ingresos en los diferentes grupos de países en desarrollo.

- La importancia de lograr el equilibrio y la complementación entre la agricultura y la industria, a fin de facilitar el crecimiento económico sostenido y la amplia difusión de sus beneficios.

- La tasa sin precedentes de crecimiento urbano en los países en desarrollo y las nuevas y enormes tareas que plantea el desplazamiento de la población a ciudades y pueblos.

- La necesidad de restablecer un ambiente internacional más propicio al comercio, las corrientes de capital y el aprovechamiento de los recursos energéticos.

POLITICAS PARA AUMENTAR EL EMPLEO PRODUCTIVO Y AMINORAR LA POBREZA

Las dimensiones del problema del empleo no tienen precedente. Se prevé que entre los años 1975 y 2000 la fuerza laboral de los países en desarrollo aumentará en cerca de 550 millones, es decir, un crecimiento de más del doble del experimentado en los 25 años anteriores. Considerando los ya altos niveles de subempleo y pobreza absoluta, no cabe exagerar la magnitud de la tarea de ampliar las oportunidades de empleo productivo y aumento de los ingresos.

En los países de bajos ingresos, la clave para lograr un aumento más rápido del empleo, un más pronto alivio de la pobreza y una base más sólida para la transformación estructural a largo plazo de la economía, radica en el mejoramiento de los resultados de la economía rural. Más de 70% de la fuerza laboral depende directamente de la agricultura, y seguirá dependiendo en el futuro previsible; además, millones de plazas de trabajo en empresas rurales de pequeña escala dependen de la producción y los ingresos agrícolas. Como prioridad, es preciso invertir el rumbo de las políticas de inversión, fijación de precios y comerciales que actualmente discriminan en contra de la agricultura. Dentro del sector agrícola, el mantenimiento de programas de apoyo institucional, técnico y de infraestructura a los pequeños agricultores ofrece las mejores perspectivas de aumentar el empleo y aminorar la pobreza. Por lo general, las pequeñas explotaciones utilizan mano de obra en forma mucho más

intensiva que las grandes y, una vez que tienen fácil acceso a los insumos básicos, como crédito, fertilizantes y servicios de extensión, y pueden contar con mercados para sus productos, los pequeños agricultores no se demoran en adoptar variedades de semillas de alto rendimiento y las técnicas asociadas de cultivo con gran intensidad de mano de obra. Con demasiada frecuencia lo que ocurre es que la distribución de estos servicios apoyados por el gobierno se inclina a favor de las grandes explotaciones o es inadecuada en otros sentidos. Las inversiones en obras de riego, de grande y pequeña escala, son especialmente promisorias, puesto que no sólo aumentan la productividad y los ingresos agrícolas sino que crean también un número considerable de plazas de trabajo en construcción y mantenimiento fuera de las fincas.

Además de los beneficios iniciales e inmediatos dentro del sector, el aumento de la producción y los ingresos agrícolas genera nuevas demandas de producción y empleo no agrícolas. Las empresas rurales no agrícolas han demostrado una capacidad notable para reaccionar a los aumentos de la demanda y proporcionar un número creciente de empleos rurales. La asistencia gubernamental, en forma de mejor infraestructura, electrificación rural y servicios ampliados de crédito, pueden mejorar considerablemente su inherente dinamismo. De modo más general, el crecimiento sostenido y de base amplia de la agricultura es en extremo importante para el éxito de la industrialización de los países de bajos ingresos, y en especial de los más grandes, cuyas industrias dependen fundamentalmente de unos mercados internos en crecimiento. La manufactura de prendas de vestir, textiles, y otros artículos de consumo masivo, la producción de insumos manufacturados intermedios para la agricultura, la elaboración de productos agrícolas y la ampliación de actividades conexas en los sectores de la construcción, el transporte y el comercio mayorista, dependen en alto grado del desarrollo de la agricultura. Por otra parte, la manufactura y distribución eficientes de los bienes de consumo adquiridos en las zonas rurales elevan los niveles de vida en éstas, en tanto que la disponibilidad de fertilizantes, plaguicidas, aperos agrícolas y otros insumos intermedios a bajo costo acrecienta la productividad técnica de la agricultura, creando así lazos mutuamente beneficiosos entre ésta y la industria.

El fomento del desarrollo agrícola en general, y de las pequeñas explotaciones en particular, será decisivo para el incremento del empleo y la aminoración de la pobreza en la mayoría de los países de ingresos medianos, en muchos de los cuales la mitad o más de la fuerza laboral continúa dedicada a la agricultura. Asimismo, la mayor parte de estas naciones debe poner en práctica políticas industriales y comerciales que fomenten un rápido aumento de la producción y el empleo en la industria. En diverso grado, casi todos los países en desarrollo han adoptado políticas de sustitución de importaciones en sus etapas iniciales de industrialización. Si bien en muchos casos las políticas de protección arancelaria y cuotas de importación han contribuido indudablemente al establecimiento de actividades industriales, el recurso prolongado a estas medidas con frecuencia ha dificultado el aumento continuo de la producción y el empleo industriales. En general, los países que han modificado sus políticas industriales y recompensado las exportaciones con incentivos comparables a los ofrecidos a las ventas internas han logrado un crecimiento más rápido de la producción y el empleo

industriales que aquéllos cuyas políticas no se han abierto al exterior. Los países del último grupo tienen posibilidades de beneficiarse con la aplicación de políticas que otorguen mayores alicientes a las exportaciones de artículos manufacturados. Toda vez que éstas suelen tener mayor coeficiente de mano de obra que los sustitutos de importaciones industriales, es probable que el empleo aumente más rápidamente. Además, el mayor nivel de eficiencia y producción industriales normalmente asociado con políticas más abiertas al exterior debe facilitar un incremento más rápido de la masa de capital nacional y, por lo tanto, aumentar la demanda de mano de obra. Las ventajas de una política industrial abierta dependen decisivamente del ambiente internacional para el comercio: mientras más liberal sea éste, mayores son los posibles beneficios de emprender la reforma de política indicada o, en el caso de los países en desarrollo que ya han reducido su sesgo negativo hacia las exportaciones, de mantener sus actuales políticas comerciales e industriales orientadas al exterior.

En algunos de los países de ingresos medianos semiindustrializados, y también en unos pocos de bajos ingresos con vastos y complejos sectores industriales, el crecimiento y afianzamiento adicionales de la estructura industrial exige prestar mayor atención a la adquisición, aprendizaje y adaptación de nuevas tecnologías industriales, al establecimiento de nuevas instituciones, como organismos de crédito a la exportación —a la vez que se hace que los existentes, entre ellos las empresas públicas, sean más sensibles a las presiones de los costos y el mercado—, y al dominio del diseño, la producción y la comercialización de nuevas manufacturas de exportación. Algunas de estas naciones están especialmente bien ubicadas para abastecer los crecientes mercados de maquinaria y otros bienes de equipo de los países en desarrollo con productos probados y experimentados en otros de estos países.

En los dos próximos decenios, la respuesta principal al problema sin precedentes del empleo en los países en desarrollo debe provenir de la elaboración y puesta en práctica de estrategias agrícolas e industriales adecuadas. Sin embargo, para que las dimensiones del aumento de la fuerza laboral sean más manejables en los primeros años del siglo XXI, las políticas de población tienen una función fundamental que cumplir. Ya se ha logrado bastante en este sentido; de 1960 a 1977 se registraron disminuciones de las tasas brutas de natalidad de más de 30% en varios países de Asia Oriental y otros, y se han observado descensos menores pero importantes en otras naciones, incluidas dos de las más grandes de bajos ingresos, la India e Indonesia. Si bien la disminución de las tasas de natalidad se debe en parte al mejoramiento general de las condiciones económicas y sociales, los programas de planificación de la familia iniciados durante el decenio de 1960 han desempeñado una función importante, lo que da más fuerza al argumento a favor de fomentar políticas más activas de población en esos países, en especial en regiones de América Latina y África al Sur del Sahara, donde las tasas de crecimiento de la población siguen siendo cercanas a 3% anual y no se han hecho grandes esfuerzos por frenarlas. La necesidad de adoptar medidas es especialmente aguda en África, donde se prevé que una combinación de factores detendrá el aumento de los ingresos globales en niveles relativamente modestos.

Si bien puede preverse que el rápido aumento de las oportunidades de empleo productivo y el crecimiento más lento de la fuerza laboral serán los principales medios para aliviar la pobreza absoluta en los países en desarrollo, se puede hacer mucho para elevar el nivel de vida de los pobres mediante un mayor suministro de servicios públicos, como educación, cuidados de la salud, abastecimiento de agua y saneamiento, de diseño apropiado y bajo costo. Las oportunidades son especialmente numerosas en algunos de los países de ingresos medianos más ricos, donde actualmente una proporción desigual de los servicios públicos beneficia a los grupos más acomodados de la población. Esos países pueden dedicar un mayor volumen del gasto público a beneficiar a los pobres. En la medida en que esos aumentos del gasto se utilicen para financiar servicios de salud preventivos antes que curativos, educación primaria más bien que superior y tomas de agua públicas en lugar de costosas conexiones domiciliarias, es probable que mejore la distribución de los beneficios entre los pobres.

URBANIZACION: PRIORIDADES

Las poblaciones urbanas de los países en desarrollo vienen creciendo a tasas enormes. De 1950 a 1975 las comunidades urbanas de estos países tuvieron que absorber cerca de 400 millones más de habitantes; es probable que en los 25 años siguientes el aumento se acerque a los 1 000 millones de personas. El número de ciudades muy grandes también viene aumentando rápidamente. En 1950 estos países tenían sólo una ciudad con más de cinco millones de habitantes; en el año 2000 habrá probablemente unas 40 ciudades con una población similar o mayor y alrededor de 18 que tendrán más de 10 millones de habitantes. Este ritmo de crecimiento urbano plantea desafíos sin precedentes a los responsables de elaborar las políticas nacionales y municipales.

Hasta cierto punto, el ritmo y la modalidad de la urbanización pueden ser influidos por las medidas de política. Los principales factores determinantes de la urbanización y la concentración espacial son el ritmo y la estructura del desarrollo económico y la tasa de crecimiento natural de la población. Puede preverse que las políticas que aceleren el desarrollo agrícola de amplia base y mejoren las condiciones de vida en las zonas rurales harán que disminuya la emigración a las ciudades. A largo plazo, las medidas que reducen la tasa natural de crecimiento de la población frenarán el incremento de las poblaciones urbanas en forma directa y también indirectamente, al aminorar las presiones demográficas sobre los recursos e ingresos rurales y contribuir así a reducir la emigración a los centros urbanos. En la mayoría de los países en desarrollo, una amplia gama de políticas refuerza la concentración de las actividades económicas en las grandes ciudades, especialmente en las capitales. La eliminación de las tendencias parciales a las grandes ciudades en las políticas gubernamentales relativas a inversiones públicas, comercio exterior, controles cambiarios y fijación de precios de los transportes y la energía, contribuiría a lograr un modelo más equilibrado de crecimiento urbano. A esto podrían contribuir también unas medidas apropiadas tendientes a fomentar el crecimiento de ciudades de tamaño medio.

Las ciudades de los países en desarrollo continuarán

creciendo aun cuando se eliminen los sesgos de las políticas nacionales que favorecen la urbanización y se adopten enérgicas medidas de descentralización. Las actividades industriales y de servicios modernas se benefician de las economías de aglomeración y, en la medida en que la industrialización y el cambio estructural constituyen un aditamento necesario del desarrollo económico, el impulso hacia el crecimiento urbano es poco menos que inexorable. Por consiguiente, la tarea fundamental a la que se enfrentan los planificadores nacionales y urbanos consiste en concebir y poner en práctica políticas destinadas a fomentar el crecimiento eficiente y equitativo de las ciudades. En lugar de arrasar los barrios de tugurios, de prohibir la venta ambulante y las modalidades tradicionales de transporte en los lugares públicos y de construir viviendas públicas de elevado costo, sistemas de ferrocarriles subterráneos y carreteras de acceso limitado, todo lo cual sirve fundamentalmente a los intereses de los residentes más ricos, las políticas de inversiones y reglamentaciones urbanas deberán formularse de modo que ayuden a la expansión de aquellas formas de transporte, vivienda, saneamiento y otros servicios que satisfagan a bajo costo las necesidades de la mayor parte de la población urbana, incluidos los sectores pobres.

Allí donde las inversiones anteriores en transportes urbanos han servido principalmente para aumentar la capacidad vial de absorción de crecientes enjambres de automóviles particulares, las prioridades deben reorientarse a favor de aumentar las flotas de autobuses y el número de rutas de éstos, hacer más fáciles las modalidades tradicionales de transporte, como la bicicleta y el caminar, y construir rutas de acceso de bajo costo para los autobuses y los vehículos de servicio en los vecindarios pobres. La construcción de mejores caminos en éstos a menudo trae beneficios de gran alcance para los residentes, toda vez que el suministro y mantenimiento de otros servicios urbanos, como el abastecimiento de agua, la electricidad, el alcantarillado, la recolección de desechos y la protección policial y contra incendios, con frecuencia dependen de que haya accesos. La respuesta a las necesidades de vivienda urbana con demasiada frecuencia se ha limitado en el pasado a la construcción de unos pocos proyectos de vivienda pública de elevado costo, que tienen escasa importancia en relación con las necesidades. Una política más apropiada sería la de eliminar los obstáculos a la iniciativa privada y suministrar los elementos de vivienda, como emplazamientos, servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y otros de bajo costo, seguridad de tenencia y préstamos para construcción, que el sector privado está en peores condiciones de proporcionar. Será menester introducir cambios similares en favor de sistemas de prestación de servicios de bajo costo y que puedan repetirse en lo que se refiere a la educación y la salud, si es que se quiere que beneficien a la mayoría de los habitantes urbanos. Tanto la magnitud del problema del ordenamiento de los recursos urbanos como la necesidad de nuevas iniciativas y orientaciones de política exigen esfuerzos concertados tendientes a definir claramente las responsabilidades y funciones de las autoridades urbanas, asegurar que éstas coordinen eficazmente sus actividades dentro de una ciudad determinada, y mejorar su capacidad técnica y de planificación, así como la coordinación entre las autoridades urbanas y nacionales con respecto a financiamiento, planificación y otras funciones pertinentes.

MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

El progreso que puedan lograr los países en desarrollo en cuanto a aumentar la producción y el empleo y aminorar la pobreza dependerá en parte del clima internacional para el comercio y las corrientes de capital. El incremento sin precedentes de la producción, el comercio y las corrientes de capital en todo el mundo en los 25 años posteriores a la segunda guerra mundial, contribuyó considerablemente a los notables avances de muchos de estos países durante ese período. La desaceleración del crecimiento de la producción y el comercio mundiales desde comienzos del decenio de 1970 ha planteado el problema fundamental de este decenio, a saber: ¿es el atraso simplemente un revés temporal que resulta de la coincidencia de acontecimientos adversos, o presagia un período prolongado de lento crecimiento y condiciones económicas internacionales inestables? En este Informe la opinión es que la salud de la economía mundial es menos un producto de procesos históricos inevitables y más el resultado de decisiones y medidas de política tomadas en determinadas naciones industrializadas y en desarrollo. El auge de la producción y el comercio mundiales durante el decenio de 1960 y principios del de 1970 fue en gran medida el resultado de esfuerzos internacionales deliberados y fructíferos para reducir las restricciones al comercio internacional. Recompensas similares podrían derivarse de poner freno al auge reciente de las medidas proteccionistas, así como de un intento más decidido de lograr un mayor crecimiento por parte de algunos países clave. Por el contrario, la continuación de las recientes tendencias desalentadoras en el comercio y la producción mundiales retardará el crecimiento de los países en desarrollo y pondrá en peligro el logro de la meta de reducir en alguna medida el número de personas condenadas a vivir en la pobreza absoluta.

La liberalización del comercio y el crecimiento de la producción son procesos que se refuerzan mutuamente. El restablecimiento de un nivel más alto de crecimiento en los países industrializados contribuiría considerablemente a contener e invertir las tendencias proteccionistas y a cosechar los beneficios de los acuerdos comerciales multilaterales de la "Ronda" de Tokio. Además, estas naciones pueden poner en práctica una diversidad de medidas de política, de pequeña envergadura pero acumulativamente importantes, encaminadas a reducir los costos para aquellos a quienes la competencia internacional y las importaciones han afectado adversamente, a fin de que la sociedad en general pueda disfrutar los beneficios de importaciones baratas, industrias de exportación de rápido crecimiento y uso intensivo de mano de obra calificada, incremento vigoroso de las corrientes internacionales de capital y otras ventajas derivadas de un comercio más liberal.

Las naciones industrializadas deben desplegar esfuerzos especiales para frenar el proteccionismo y facilitar el acceso de las importaciones provenientes de los países en desarrollo a sus mercados. Esto es fundamental no sólo para acelerar el crecimiento y la generación de empleo en estos últimos, sino además porque a largo plazo redundará en provecho de las propias naciones industrializadas, que tienen posibilidades de beneficiarse de las importaciones baratas y la rápida expansión de mercados importantes para sus exportaciones. En 1976 los países en desarrollo adquirieron 28% del total de

las exportaciones de mercancías de los industrializados y 31% de las de manufacturas.

Por su parte, los países en desarrollo deben resistir la tentación de adoptar políticas comerciales cerradas al exterior o de postergar la transición a sistemas más orientados a las exportaciones, como reacción a las actuales dificultades del ambiente comercial internacional. No obstante las recientes tendencias proteccionistas, los países que estén dispuestos a arriesgar inversiones en industrias de exportación tienen muchas oportunidades de exportar. Las naciones en desarrollo más avanzadas pueden fortalecer la base de un comercio más liberal si están dispuestas a renunciar progresivamente a sus actuales privilegios e inmunidades con respecto a los reglamentos del comercio internacional y si participan más activamente en futuras negociaciones y acuerdos comerciales multilaterales. En los casos en que esto suponga una disminución significativa de la protección comercial, las garantías de un mayor acceso a los mercados y el suministro de corrientes adicionales de capital a plazo mediano de fuentes oficiales —a fin de aliviar las tensiones previsibles en la balanza de pagos— pueden contribuir a la transición a políticas más liberales.

Unas condiciones económicas más boyantes en los países industrializados deberían también facilitar el aumento necesario de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Se estima que los desembolsos netos de AOD de los miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han ascendido a sólo 0.32% del producto nacional bruto (PNB) de los donantes en 1978, lo que dista mucho del objetivo establecido a escala internacional en 1970, con el respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 0.7% del PNB. Sólo Dinamarca, Francia, Noruega, Países Bajos y Suecia excedieron o se acercaron a ese porcentaje en 1977, en tanto que la AOD neta proveniente de las tres economías más fuertes, la República Federal de Alemania, Estados Unidos y Japón, siguió siendo mucho menos de la mitad de la meta establecida de 0.7%. El aumento de las transferencias de recursos en condiciones concesionarias reviste especial importancia para los países de bajos ingresos, que dependen de estas fuentes para obtener cerca de 70% de sus entradas netas de capital a plazos mediano y largo. Unos aumentos porcentuales relativamente pequeños de las corrientes de AOD en términos reales podrían tener repercusiones importantes en la pobreza absoluta si se encauzasen hacia los países de bajos ingresos y los de ingresos medianos más pobres.

Más de dos terceras partes de los desembolsos netos de capital a plazos medio y largo destinados a los países de ingresos medianos provienen de fuentes privadas, predominantemente bancos comerciales. Si bien el mercado internacional de capital privado ha sido notablemente sensible y flexible en cuanto a satisfacer las necesidades de capital de estos países, las experiencias recientes y las proyecciones correspondientes al próximo decenio son motivo de cierta preocupación. En primer lugar, la estructura de vencimientos a plazos relativamente cortos de los préstamos de bancos comerciales privados y la necesidad concomitante de frecuentes refinanciamientos se traducen en un gran volumen de deuda pendiente y aumentan la fragilidad de la estructura de las corrientes de capital. Las recientes medidas tendientes a

aumentar los recursos del Fondo Monetario Internacional y las propuestas que vienen estudiándose para aumentar la base de capital del Banco Mundial y de otras instituciones internacionales fortalecerán el sistema financiero internacional. Sin embargo, subsiste un amplio margen para renovar los esfuerzos y adoptar nuevas medidas con objeto de aumentar las corrientes de capital oficial a plazo mediano hacia los países en desarrollo y ayudarles a ajustarse a cambios importantes en el ámbito económico internacional y a llevar a cabo reformas convenientes, aunque arriesgadas, de sus políticas comerciales e industriales.

En segundo lugar, aunque las proyecciones no apuntan a un problema general de endeudamiento de los países en desarrollo, de cuando en cuando determinados países pueden experimentar crisis de liquidez, como las ocurridas en años recientes en Perú, Turquía y Zaire. En la medida en que las iniciativas internacionales tengan éxito en mejorar la estructura de vencimientos de las corrientes de capital y deuda globales, esas crisis se producirán cada vez con menor frecuencia. La liberalización y ampliación de los servicios internacionales de financiamiento compensatorio contribuirán a mitigar las escaseces de liquidez que pueden causar las deficiencias imprevistas de los ingresos de exportación. Asimismo, es conveniente mejorar los métodos para hacer frente a las crisis de liquidez cuando ocurren. En especial, los procedimientos existentes para las renegociaciones multilaterales de la deuda oficial bajo los auspicios del Club de París podrían beneficiarse de un estudio más sistemático de las perspectivas y necesidades a mediano plazo de los países deudores en cuestión, de modo que se redujera la necesidad de efectuar refinanciamientos repetidos de la deuda.

Como los acontecimientos recientes lo han demostrado, el equilibrio de la demanda y la oferta mundiales de energía sigue dependiendo de lo que sucede en unos pocos países exportadores de petróleo importantes. En estas circunstancias, los acontecimientos que tienen lugar en un solo país pueden precipitar interrupciones del suministro de petróleo, acompañadas de aumentos temporales de su precio real. Sin embargo, si se pueden evitar disminuciones prolongadas de la producción en países importantes y adoptar enérgicas medidas de conservación en los principales países consumidores, y si se realizan esfuerzos sostenidos por encontrar y aprovechar nuevos recursos energéticos, los aumentos del precio real de la energía intercambiada internacionalmente no deberán ser considerables.

En una perspectiva más amplia, los dos próximos decenios pueden considerarse como un período crítico de transición durante el cual el mundo deberá ajustarse a mayores precios de la energía y a la creciente utilización de sustitutos energéticos del petróleo, más costosos. Si bien diferentes grupos de países se enfrentan a distintos problemas en este período de transición, todos comparten un vivo interés por garantizar que la transición ocurra sin incidentes. En los países industrializados, las principales tareas de esta etapa son restringir la demanda, mejorar la seguridad de la energía nuclear, fijar los precios de los suministros internos de energía y desarrollar combustibles sintéticos. Las preocupaciones centrales de los países exportadores de petróleo incluyen la decisión acerca de qué tan rápido se debe explotar su recurso no renovable y la formulación de una estrategia de desarrollo a largo plazo que facilite la transición

a un futuro pospetrolero. Para otras naciones en desarrollo, las prioridades son explorar y explotar el potencial interno de energía comercial, aumentar la eficiencia de las fuentes de energía no comercial y no convencional y ajustarse a los precios más elevados de los recursos energéticos. Si el mantenimiento del equilibrio en el mercado global de energía requiere aumentos de los precios reales en los dos próximos decenios, resultaría ventajoso para todos que esos aumentos fueran graduales y predecibles, en lugar de bruscos e imprevistos. Esto facilitaría la planificación de la inversión en distintas fuentes de energía y permitiría a los países importadores de petróleo ajustar sus economías en forma paulatina; en los más débiles y más gravemente afectados de los países en desarrollo no petroleros, estos ajustes requerirán mayor apoyo a la balanza de pagos. Por su parte, las naciones exportadoras de petróleo pueden esperar beneficiarse de la evolución ordenada de la producción, el comercio y las corrientes de capital mundiales, que tiene mayores probabilidades de ir asociada a una transición sin problemas.

Los países en desarrollo se enfrentan a grandes dificultades para aprovechar sus muy considerables recursos no explotados de energía comercial. En su mayoría estos países necesitan aumentar las inversiones y mejorar sus sistemas técnicos, de planificación y administración del sector energético. El apoyo internacional, en forma de financiamiento y asistencia técnica —como la reciente iniciativa del Banco Mundial con respecto a la producción de petróleo—, puede contribuir considerablemente a este esfuerzo. Asimismo, las naciones en desarrollo tienen que prestar mayor atención a la utilización de fuentes de energía no comercial. Casi la mitad de la energía producida en los países en desarrollo importadores de petróleo proviene de combustibles tradicionales, como la leña, el carbón y los residuos animales y de cultivos. En muchas partes del mundo donde el uso incontrolado de estos combustibles ha provocado graves problemas ecológicos de deforestación y desertización, existe la urgente necesidad de poner en práctica programas de forestación bien planeados. Al mismo tiempo, la fabricación y difusión de mejores cocinas, plantas de biogás y hornos de carbón podrían mejorar considerablemente la eficiencia de utilización de la energía proveniente de fuentes tradicionales.

A medida que el decenio de 1970 se acerca a su fin, se hace cada vez más evidente la interdependencia de la economía mundial. El comercio internacional, las corrientes de capital y la explotación de los recursos energéticos son algunos de los hilos de la red de lazos económicos e intereses mutuos que unen a las naciones. La ruptura de uno de esos hilos hace peligrar a los demás; por ejemplo, el mayor proteccionismo frente a las exportaciones de los países en desarrollo reduce su capacidad para atender el servicio de la deuda y debilita el sistema financiero mundial. De un modo fundamental, la interdependencia es algo mucho más profundo que los meros intereses económicos compartidos. Todas las naciones pueden esperar beneficiarse de fomentar una vía de desarrollo que elimine de este planeta la plaga de la pobreza absoluta y proporcione empleo productivo y seguridad a sus habitantes. La comunidad internacional se enfrenta al desafío de adoptar iniciativas de política bien ponderadas tendientes a apoyar los intereses mutuos fundamentales de las naciones y protegerlos de medidas imprudentes adoptadas en pos de ventajas efímeras. □